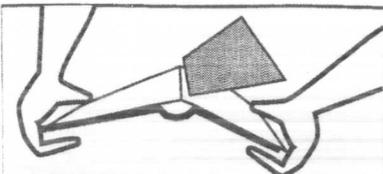
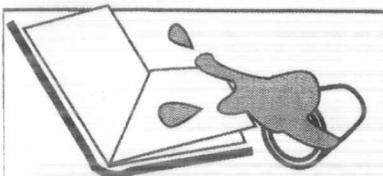


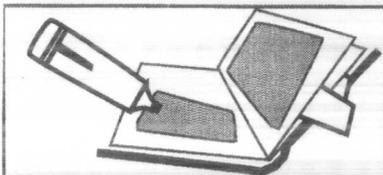
Seamos
amables
con los **libros**



No lo abra más de 120°, las hojas se despegan si la encuadernación no es buena



Sea cuidadoso, no lo manche con comidas o bebidas, ni lo deje cerca de animales domésticos o niños pequeños



No lo escriba, subraye o marque (con lápiz tampoco!). No doble las páginas ni agregue notas

Respete la fecha de devolución, los libros deben estar disponibles para todos.

Hay sanciones por devolución fuera de término, y para aquellas personas que deterioren los libros de la Biblioteca

El próximo lector merece encontrar el libro en perfecto estado

Hilda Sabato Historia de la Argentina

1852-1890

La política involucraba directa o indirectamente a sectores amplios y variados de la población. Quienes participaban de las redes electorales representaban una proporción menor y heterogénea del conjunto, pero las novedades partidarias y la controversia política llegaban a la mayoría a través de la prensa y otros mecanismos de difusión, como el rumor y los panfletos, así como por medio de la acción colectiva en asociaciones y la discusión pública en cafés, pulperías y otros ámbitos de sociabilidad de elite o popular, ampliando su relevancia social.

En este marco, tal vez los momentos de mayor impacto político en la vida cotidiana estuvieron relacionados con la revolución y la guerra, en un período que dio poco respiro en ese terreno, como se verá en el próximo capítulo.

5. En guerras

La afirmación de los liberales en el gobierno nacional a partir de 1862 no significó el fin de los conflictos por el poder. En varias provincias, los federales se levantaron en armas para impugnar el centralismo estatal, y en general fueron doblegados por el Ejército de Línea y guardias nacionales de provincias aliadas al oficialismo. Entre los liberales, también se produjeron disputas y divisiones. En ese contexto de enfrentamientos políticos, se desató un conflicto en otra escala: la guerra de la Triple Alianza —la Argentina, el Brasil y el Uruguay— contra el Paraguay, uno de los episodios más trágicos de la historia latinoamericana. Este capítulo refiere a la situación local en los años anteriores a la tragedia, para luego concentrarse en esa guerra y, sobre todo, en las reacciones que despertó y los resultados que tuvo para la Argentina.

El uso de la fuerza fue un recurso habitual en la vida política de estos años, legitimado por principios más viejos o más nuevos, que fundaban el derecho de rebelión frente al despotismo, así como por la costumbre, que había convertido a las armas en un instrumento de acción —entre otros— en las disputas políticas que jalonaron la primera mitad del siglo XIX. Si bien la Constitución de 1853 introdujo una limitación a ese derecho a través de la figura del delito de sedición, a la vez establecía la obligación ciudadana de defender la patria y la propia Constitución. A partir de entonces, mientras el gobierno central sostenía su potestad de utilizar el ejército nacional para aplastar la rebeldía de quienes se alzaban contra su mandato o el de sus aliados políticos, los que así actuaban esgrimían la legitimidad de sus acciones en nombre de aquellos principios y de la obligación constitucional de defenderse contra el despotismo.

Esa dinámica de confrontación marcó decisivamente los años sesenta, tanto en lo que respecta a los intentos por crear un orden estatal

centralizado como a las formas de hacer política y construir poder. En la segunda mitad de la década, además, esa dinámica experimentó un giro brutal cuando cambió radicalmente la escala del conflicto armado y pasó a convertirse en una guerra internacional, la guerra entre la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) y el Paraguay.

Resistencias federales

La subordinación al poder central que la flamante gestión de Mitre había logrado por medio de una combinación de represión, negociación y alianzas con diferentes grupos políticos a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional fue de corto alcance. La imposición de los liberales en la mayoría de las provincias no resistió el embate de las disputas entre sus propios dirigentes ni la impugnación de los federales marginados del poder —con la notable excepción de Entre Ríos, donde Urquiza siguió ejerciendo su dominio—. Así, en 1863 se encendió el conflicto en Cuyo y parte del NOA, donde pocos meses antes la Paz de la Banderita había frenado los enfrentamientos entre las fuerzas del ejército y las de Chacho Peñaloza, a quien se había encomendado “la pacificación” de La Rioja, una provincia donde los liberales estaban en franca minoría.

La continuada actuación represiva de las tropas nacionales en el interior, donde varios gobernadores se mantenían en el poder gracias a esa presencia, mantuvo a los federales en vilo, y las presiones sobre los jefes de ambos bandos fueron en aumento. El general Paunero, que durante unos meses mantuvo relaciones respetuosas con Peñaloza, se quejaba a Mitre por las reconveniones de los liberales locales, incapaces de manejar las provincias que habían quedado a su cargo, mientras desde San Juan Sarmiento seguía impulsando la solución violenta. Chacho, por su parte, denunciaba frente al mismo Paunero la falta de cumplimiento de los términos de la paz, a la vez que disuadía a algunos de sus partidarios dispuestos a rearmarse.

Los rumores circulaban por todo el interior y las tensiones crecían, hasta que, finalmente, se desató la resistencia activa de los federales. Caudillos de diferente nivel de la constelación chachista movilizaron sus hombres y desde La Rioja incursionaron hacia otras provincias: Fructuoso Ontiveros y Lucas Llanos invadieron San Luis por el norte; Felipe Varela, Carlos Ángel y Severo Chumbita entraron en Catamarca; desde Guandacol algunas partidas llegaron a Jáchal, en San Juan. Por otro lado, desde Chile llegaba a Mendoza Francisco Clavero, quien a

la cabeza de un grupo ocupó la zona de San Carlos y desde allí sumó apoyo para ampliar la rebelión contra el gobernador.

De acuerdo con Beatriz Bragoni, ese apoyo a un antiguo y respetado dirigente de la región (guerrero de la Independencia, más tarde militar de frontera y hasta 1860 figura política en la Mendoza de la Confederación) provino tanto de federales influyentes con arraigo territorial y partidario como de un elenco más amplio de habitantes de la zona de San Carlos, la mayoría con experiencia política previa. Mientras Clavero ponía en jaque al gobierno de Molina, en La Rioja el gobernador liberal Francisco Gómez —luego de pedir la intervención del gobierno nacional, que le fue denegada— abandonaba el cargo, que fue ocupado enseguida por un federal.

Ante estos movimientos, la reacción de los liberales fue inmediata. El santiagueño Manuel Taboada fue designado jefe de operaciones por su gobierno y los de Catamarca y Tucumán, para perseguir a las montoneras que los amenazaban. Paunero movilizó las tropas a cargo del coronel Sandes para defender San Luis, y Sarmiento —gobernador de San Juan— retomó sus presiones sobre Mitre, quien terminó nombrándolo director de la guerra y comandante general de las fuerzas de Cuyo, y luego de La Rioja, para llevar adelante “una guerra de policía”. El presidente se negaba a darle al levantamiento el carácter de “guerra civil” y, en una carta a Sarmiento, calificaba a los rebeldes de “bandas de ladrones armados y gavillas de delincuentes”. Al mismo tiempo, le escribía a Peñaloza para protestar por las amenazas que partían de La Rioja hacia las provincias vecinas y para solicitarle ayuda a fin de “mantener el orden” y perseguir a “los ladrones”. Chacho, por su parte, le señaló las arbitrariedades del gobierno nacional y su “dominación despótica”, así como los atropellos sufridos por sus partidarios, lo cual lo obligaba a retomar la lucha.



Carta de Vicente “Chacho” Peñaloza al Presidente Mitre del 16 de abril de 1863

Exmo. Señor: No ha podido el que firma dejar de ser tan franco y leal como siempre y es por esto que se dirige a V.E. participándole la penosa situación en que han puesto a estos pueblos desgraciados sus gobernantes, y las consecuencias que han dado sus procedimientos.

Después de la guerra exterminadora por que ha pasado el país, y después de todos los medios puestos en juego para terminar ese malestar

de todas las provincias, muy conforme y lleno de fe en el programa de V.E., han esperado los pueblos argentinos una nueva era de ventura y progreso; han esperado ver cumplidas las promesas hechas tantas veces a los hijos de esta desgraciada patria.

Pero, muy lejos de ver realizado su sueño dorado, muy lejos de ver cumplidas sus esperanzas, han tenido que tocar el más amargo desengaño, al ver la conducta arbitraria de sus gobernantes, al ver despedazadas sus leyes y atropelladas sus propiedades y sin garantías para sus mismas vidas. Los gobernantes de estos pueblos convertidos en otros tantos verdugos de las provincias cuya suerte les ha sido confiada atropellan las propiedades de los vecinos, destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables sin más crimen que haber pertenecido al partido federal y sin averiguar siquiera su conducta como partidarios de esa causa. Yo mismo, que he esperado ver realizadas las promesas hechas a esta provincia y a las demás, según el tratado celebrado conmigo, he sufrido hasta el presente la más tenaz hostilización por parte de los gobiernos circunvecinos, ya tomando y mandando ejecutar a los hombres que me han acompañado, a pesar de la garantía que por ese mismo tratado tenían, ya requiriéndome tales o cuales individuos que estaban asilados a mi lado para evitar la muerte segura que les esperaba si creyendo en esas garantías volvían al seno de sus familias; y, por último, despedazando mi crédito y haciéndome pasar por un hombre más criminal, sin más causa que haber comprendido mi deber y no haber querido prestarme a servirles de agente en sus criminales propósitos.

Mil veces se ha levantado mi voz y elevado súplicas al gobierno nacional, pidiendo justicia y el castigo de esos hombres, sin que haya encontrado justicia, y teniendo que someterme al azote de sus tiranos.

Es por esto, señor presidente, que los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia, y los hombres todos, no teniendo más ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses atropellados vilmente por los perjuros. Esas mismas razones y el verme rodeado de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de esas promesas me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la espada, que había colgado, después de los tratados con los agentes de V.E. No creo merecer por esto el título de traidor porque no he faltado a mis promesas, sino cuando a mí se me ha faltado, y cuando se ha burlado la confianza de todos los argentinos.

No es propósito reaccionar al país para medrar por la influencia de las armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es de mi deber el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí, por los pueblos. Es, en una palabra, el amor a la patria, ese sentimiento natural de todos los corazones, y que debiera ser el que me dirija la conducta de los primeros mandatarios, para corresponder a la fe con que el pueblo argentino depositara en ellos su suerte.

V.E., como jefe de toda la nación, es el padre de todos los argentinos, y es de quien deben esperar sus hijos el remedio para estos males, y si desoyendo la voz de ellos no pusiese término a esta terrible situación veremos, con pesar, correr a torrentes a la sangre de todos los argentinos y las consecuencias pesarán sobre los que la hicieron verter.

Después de haber cumplido mi deber manifestando a V.E. estas verdades, sólo me resta esperar que la penetración y juicio de V.E. no permitirán la continuación de estos males, y pondrán inmediatamente en ejercicio todo su poder e influencia a fin de salvar la República toda del caos en que se va a precipitar, pudiendo aún asegurar, por mi parte, que para lo que sea en bien de mi país, y de mis compatriotas, siempre me hallará dispuesto el gobierno nacional y quedo esperando su definitiva contestación, que será la norma de mis ulteriores procedimientos.

En Ricardo de Titto, *El pensamiento de los federales*, Buenos Aires, El Ateneo, 2009, pp. 253-255. ■

Por esos días Peñaloza, en su carácter de “general del tercer cuerpo del ejército del centro”, lanzó una proclama “a las provincias argentinas”; donde llamaba a sus compatriotas a defender los derechos, libertades e instituciones propuestos en mayo y consagrados después de Caseros (esto es, el orden constitucional cincelado por Urquiza). Para ello, los convocaba a combatir, en nombre de la justicia de esa causa, a los “tiranos opresores” de la patria y, finalmente, dirigiéndose a sus potenciales seguidores como “guardias nacionales”, les recordaba que debían enfrentar a sus propios hermanos, en nombre de la misma nacionalidad, y por lo tanto habrían de combatir con la ley y ahorrando “sangre argentina”. De esta manera, Peñaloza inscribía su levantamiento en la tradición revolucionaria ya conocida, que legitimaba el uso de las armas por parte de los ciudadanos (guardias nacionales, compatriotas) frente a la opresión, a la vez que reconocía en el enemigo a un connacional con el que debería convivir en el futuro.



Proclama de Vicente "Chacho" Peñaloza

El general del tercer cuerpo del ejército del centro, a las provincias argentinas. Compatriotas: Es llegado el momento solemne de reivindicar los sagrados derechos que los traidores y perjuros nos usurparon. La patria nos llama de nuevo a afianzar en nuestras provincias el imperio de la ley, y las sabias instituciones que surgieron el gran día del pensamiento de Mayo, y se establecieron en Caseros bajo la noble dirección del héroe de Entre Ríos, capitán general Urquiza.

El viejo soldado de la patria os llama en nombre de la ley, y la nación entera, para combatir y hacer desaparecer los males que aquejan a nuestra patria y para repeler con vuestros nobles esfuerzos a sus tiranos opresores.

Vais a dar un nuevo testimonio de lealtad y valor, combatiendo, si necesaria fuera la lucha, y venciendo, porque nuestra es la victoria, desde que tenemos de nuestra parte la justicia de la causa.

Vamos a abrir una campaña y emprender una obra grande en su objeto y sufrimientos; pero llena de gloria al reconquistar nuestros sagrados derechos y libertades, reunir la gran familia argentina y verla toda entera cobijada bajo el manto sagrado en las leyes y bajo de los auspicios del padre común.

Guardias Nacionales de los pueblos todos: al abrir esta campaña no olvidéis que vais en busca de hermanos, que el suelo todo que vais a pisar es argentino; y que el pendón de la nacionalidad no lleva el lema de sangre y exterminio; la sangre argentina debe economizarse, como los frutos de una paz duradera y benéfica para todos; lleváis la enseña de la ley del venerado código de mayo, ante cuya divinidad haréis postrar a esos hijos perjuros que, olvidando sus deberes fueron a servir de instrumento ciego de las miras de sus propios enemigos. Nuestros nobles esfuerzos no serán aislados; todas las demás provincias responderán a nuestro llamamiento, y con un movimiento simultáneo harán desaparecer a sus opresores.

El feliz resultado que han dado hasta ahora los primeros ensayos ha causado gran impresión en el ánimo de todos nuestros compañeros de causa y movidos del más patriótico entusiasmo se preparan a contribuir con sus esfuerzos, y sacrificar su existencia, si necesario fuese hasta conquistar el fin propuesto.

Adelante, pues, héroes argentinos: no desmintáis la opinión de bravos y leales que siempre habéis tenido; algunos esfuerzos más y habremos

llenado nuestra misión y cumplido nuestro deber. Contad conmigo, que no os abandonaré; antes, sí, seré el primero en sacrificarme y rendir hasta el último aliento de mi vida en las aras de la patria. Así os lo asegura vuestro compatriota y amigo.

Ángel Vicente Peñaloza

En Tulio Halperin Donghi, *Proyecto y construcción de una nación. (Argentina 1846-1880)*, Caracas, Biblioteca de Ayacucho, 1980, p. 232. ▀

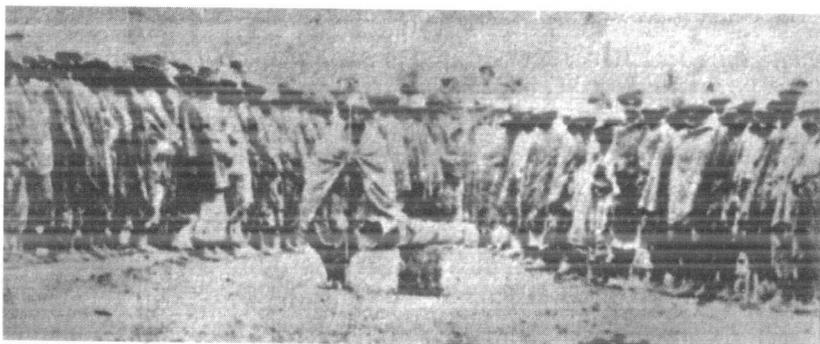
Esta misma preocupación por el carácter de una lucha que enfrentaba a hermanos en discordia estuvo presente en el gobierno nacional. A diferencia de la actitud intransigente de Sarmiento, quien en manifiesto a los riojanos calificó a Peñaloza de "bandolero", "corrompido e ignorante" y proclamó la necesidad de aniquilarlo, para lo cual decretó el estado de sitio en San Juan y La Rioja y dictó órdenes y resoluciones incompatibles con las garantías constitucionales, el ministro del Interior Guillermo Rawson pretendía mostrar temperancia. Así, intervino de inmediato, reconvino al director de la guerra e inició con él una polémica de largo aliento, que reflejaba las diferentes maneras de entender la represión estatal.

Ya iniciada la contienda, Rawson le advertía por carta a Paunero: "[E]l señor presidente teme que el movimiento de indignación [...] llegue a convertirse, en la lucha o en la persecución de los vencidos, en actos de crueldad dolorosa [...]. La posibilidad, por remota que sea, de estos excesos, que suelen presentarse a menudo en las luchas civiles, preocupa al señor presidente, que quisiera evitar a toda costa cualquiera violencia fuera de la necesaria para el triunfo, y que no esté en los límites de las leyes de la paz y de la guerra". El conflicto, sin embargo, desbordó muchas de esas prevenciones. La rebelión federal se expandió y abarcó varias provincias, aunque no logró concitar el apoyo del máximo jefe del partido, el general Urquiza, que permaneció recluido en su reducto entrerriano. Las tropas nacionales, compuestas por varios regimientos del Ejército de Línea y guardias nacionales —reclutadas con dificultad y en competencia con el llamado chachista a sumarse a sus milicias montoneras—, fueron rápidamente movilizadas para reprimir, y en enfrentamientos parciales, entre abril y mayo, derrotaron a las fuerzas federales, incluidas las del propio Peñaloza.

A pesar de las bajas y los prisioneros, los federales en buena medida lograron escapar a la persecución internándose en las serranías y

los bosques y se reagruparon para volver a incursionar en diferentes lugares. Así, en junio Peñaloza entró en Córdoba, donde los “rusos” —como se conocía a los federales cordobeses— habían logrado depone al gobernador liberal Justiniano Posse para reemplazarlo por uno de los suyos y controlaban la ciudad. Aclamados por sus partidarios, Chacho y las montoneras pronto salieron al encuentro de las tropas nacionales al mando de Paunero y Sandes, en las afueras de Córdoba. Dos mil milicianos (1000 de caballería, procedentes de San Luis y La Rioja, y 1000 infantes de Córdoba) se enfrentaron a los cerca de 4000 hombres de las fuerzas regulares, en la sangrienta batalla de Las Playas. La derrota federal fue aplastante; a los muertos y heridos en batalla, se sumaron cuatrocientos prisioneros. Varios jefes y oficiales federales fueron fusilados in situ, dando lugar a uno de los episodios de violencia más criticados de esta guerra.

Con el resto de sus hombres, Peñaloza inició un largo rodeo para dirigirse de nuevo a Los Llanos riojanos, mientras Chumbita, Ontiveros y otros jefes hacían incursiones sobre San Luis y Mendoza. Diversos intentos de negociar una amnistía entre Chacho y Paunero fracasaron, y aquel inició una marcha sobre San Juan, con 1200 hombres. Derrotado en Caucete, Peñaloza finalmente escapó con un pequeño grupo de custodia, pero sus perseguidores lo alcanzaron en Olta, donde fue asesinado de un lanzazo por el oficial a cargo, el mayor Irrazábal, el 12 de noviembre de 1863. Su cabeza fue separada del cuerpo y expuesta en una pica en la plaza del pueblo.



Soldados chachistas tomados prisioneros luego de ser derrotados en Caucete. La fotografía fue encargada por Sarmiento, AGN.

Este acto feroz puso en evidencia la distancia entre el discurso oficial de civilización y la cruel realidad de la guerra. Las reiteradas advertencias

tanto de los jefes federales como de las autoridades nacionales en el sentido de que fuera del campo de batalla no se admitiría el ejercicio de la violencia sobre los vencidos son indicativas de la persistencia de esas prácticas violentas, que iban desde el saqueo de los pueblos ocupados o de las casas de los opositores hasta el pase a degüello o el fusilamiento de prisioneros. Eran prácticas con larga tradición, que abrevaban en sensibilidades respecto de la vida y la muerte muy diferentes de las actuales. Al mismo tiempo, la insistencia en condenar esas acciones indica los cambios que estaban produciéndose en la percepción de los límites éticos y políticos de la violencia, que a su vez se relacionaban con la convicción de que, a pesar del enfrentamiento circunstancial, los protagonistas de esas guerras eran parte de una misma nación y, por lo tanto, estaban obligados a reconocerse como tales en pos de una convivencia futura.

El asesinato de Chacho evidenciaba que esos límites estaban en discusión. La acción de Irrazábal recibió la aprobación inmediata de Sarmiento —que ya había renunciado a su cargo de director de la guerra, pero seguía como gobernador de San Juan—, quien lo recibió en su provincia como un héroe. En una carta a Mitre, el sanjuanino expresó: “No sé lo que pensarán de la ejecución de Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses”. Mitre, sin embargo, pensaba diferente. Luego de aclarar que comprendía “todo el bien que ella ha de traer para la conservación del orden y la paz”, agregaba “sin embargo, no he podido prestar mi aprobación a tal hecho. Nuestro partido ha hecho siempre ostentación de su amor y respeto a las leyes y a las formas que ellas prescriben, y no hay a mi juicio un solo caso en que nos sea permitido faltar a ellas sin claudicar de nuestros principios”. Ello no le impidió, a su vez, disponer por decreto que los jefes, oficiales y tropas participantes en la lucha contra la montonera merecían “la gratitud del país y la consideración del Gobierno”. Aunque, nuevamente, surgía la advertencia: el gobierno no podía aprobar la ejecución de Peñaloza “pues como cualquier otro ciudadano [...] su vida sólo correspondía a la justicia y a las autoridades que por la Constitución, están encargadas de hacerla efectiva”. El propio Irrazábal, al año siguiente del asesinato, pidió la baja del ejército porque entendía que su acción, desautorizada por el presidente, había manchado el honor de las armas nacionales.

De esta manera, el gobierno central llevó adelante su política de imposición del predominio de los liberales en la mayor parte del territorio nacional, y para ello no dudó en recurrir a las armas para eliminar a aquellos federales que ofrecían resistencia a esa voluntad uniformadora. Al mismo tiempo intentaba dar forma a una nueva legalidad, fundada en la subordinación al poder central, el estado y sus instituciones. En consecuencia, también buscó eliminar los gestos de autonomía de sus propios partidarios. Era importante el respeto a las autoridades de los diferentes poderes del estado, y la decisión sobre el destino de los prisioneros correspondía a la justicia.

En ese marco, el asesinato de Chacho, que a Sarmiento le parecía un buen ejemplo para servir de escarmiento a sus seguidores, al gobierno central le resultaba un pésimo ejemplo de desconocimiento de las leyes y el poder de las instituciones. No fue el único caso cuestionado. Así, por ejemplo, en ocasión de la derrota del jefe federal Francisco Clavero en Mendoza, la mayoría de sus hombres fueron indultados por el gobierno provincial mientras que Clavero fue sometido a un tribunal militar, que lo condenó a muerte por fusilamiento. Apelada la sentencia ante la presidencia de la república, esta fue revocada, pues Mitre consideró que su juzgamiento correspondía a un tribunal civil. En los años siguientes, como veremos, el poder judicial tendría cada vez más injerencia en los casos encuadrados como “delitos de rebelión”.

Discordia entre liberales

A la caída de Peñaloza, se afianzó el poder liberal en el interior, pero ello no implicó que cesaran los conflictos políticos. En varias provincias, los federales se reorganizaron para intervenir en las elecciones —en algunos casos, bajo el nombre de Partido Constitucional— y lograron alguna participación en las legislaturas. No obstante, las disputas más violentas de los años 1864 y 1865 tuvieron lugar entre grupos políticos del propio liberalismo.

En Catamarca, Salta, Córdoba y La Rioja, esa rivalidad trascendió los ámbitos de las elecciones, los debates legislativos y la prensa, para involucrar acciones armadas que movilizaron a sectores de la Guardia Nacional y las milicias partidarios de uno u otro grupo. Se produjo, además, la intervención de dos provincias que competían regionalmente por la hegemonía liberal, Tucumán y Santiago del Estero, que buscaban extender su influencia. El gobierno nacional, por su parte,

operó con relativa prudencia: en algunos casos, como en Catamarca, el Congreso dispuso la intervención; en otros, como en La Rioja, dejó en manos de sus “procónsules” la negociación de una salida; o como ocurrió con Salta, ordenó no apoyar al sector que, acusando a sus rivales de “mazorqueros”, había recurrido a la fuerza para impedir su ascenso a la gobernación.

En la provincia de Buenos Aires, un espacio clave para Mitre, que había emergido como dirigente nacional a partir de la construcción de su base de poder porteña, la escisión del liberalismo se agudizó. A mediados de la década de 1860, la división inicial que había llevado a la creación de dos clubes electorales diferentes, el del Pueblo y el de la Libertad, cada uno de los cuales se adjudicaba la auténtica representación del Partido de la Libertad, se fue transformando en una fractura más duradera. A los primeros, dirigidos por Mitre, se los identificaba como “nacionalistas”, pues en principio aspiraban a subordinar la provincia al poder central; los otros, encabezados por Adolfo Alsina, eran los “autonomistas”, defensores de la soberanía provincial. Si bien no faltaron divisiones internas en cada grupo, así como acuerdos y alianzas entre sectores de uno y otro lado, las dos agrupaciones serían, durante varias décadas, ámbitos de aglutinación política, y más tarde adoptarían la denominación de “partidos”.

La rivalidad entre ellos se desplegó en diversos planos, que iban desde el más obvio de la competencia electoral hasta otros que involucraban el debate público, la publicidad, la búsqueda de influencias y apoyos en diferentes sectores sociales, y la disputa por ocupar lugares en el aparato del estado, tanto provincial como nacional. El mitrismo fue más exitoso en su intento por extender su influencia a otras provincias, mientras que el autonomismo, que no vaciló en aliarse con grupos del interior, alcanzó sus mayores logros en Buenos Aires, donde obtuvo sucesivos triunfos frente a su rival. En su gestión como presidente, Mitre debió, por lo tanto, atender también ese frente local, que le restaba energía y apoyo para su empresa más ambiciosa, la afirmación del poder central.

Este panorama se complicó de manera inesperada y radical a raíz del estallido, entre finales de 1865 y principios de 1866, de la guerra entre el Paraguay y la Argentina, el Brasil y el Uruguay, unidos por el tratado de la Triple Alianza.

La gran guerra

El conflicto armado que se desató en el rincón sudeste de América constituyó, por diferentes razones, un episodio crucial en la historia de esta región, que tuvo, además, trascendencia mundial. En primer lugar, fue posiblemente la contienda más larga y destructiva de todas las que tuvieron lugar en Sudamérica durante el siglo XIX y, en el plano internacional, se cuenta entre los más sangrientos enfrentamientos entre estados en el período comprendido entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. A pesar de la enorme disparidad de recursos a favor de los aliados, el conflicto se prolongó más de cinco años, durante los cuales se perdieron alrededor de 300 000 vidas –las tres cuartas partes de ellas, paraguayos varones–. Las muertes por enfermedades y por hambre superaron en todos los casos las producidas en los campos de batalla.



W. Bate & Cía., *Cadáveres paraguayos*, albúmina, 11 x 18 cm, 1866, Biblioteca Nacional del Uruguay.

En segundo lugar, se trató de una guerra “moderna”, en la que se desplegaron nuevos métodos y tecnologías, tanto en relación con el armamento como con la infraestructura y la organización. Estos se combinaron con formas más tradicionales de hacer la guerra, en las que, a la masividad impersonal de la máquina bélica, se sumaron los actos personales de arrojo individual encuadrados en los códigos de honor que habían predominado hasta entonces en la vida militar.

La guerra fue, en tercer término, un momento clave en la definición de la geografía política de la región: el Brasil y la Argentina se consolidaron como potencias regionales; se fijaron los límites interestatales, que hasta entonces estaban en disputa y que beneficiaron a los vencedores; se dispuso la libre navegación de los ríos; y el Paraguay, por décadas, quedó subordinado a sus poderosos vecinos, con lo cual se gestó un nuevo equilibrio político entre los estados sudamericanos. Más controvertidas resultaron las consecuencias internas en materia de construcción del estado y afirmación de la nacionalidad en cada uno de los países beligerantes, ninguno de los cuales salió indemne de esta guerra.

En cuarto lugar, el conflicto resultó en la ruina del Paraguay. Ocupado militarmente, su territorio fue arrasado por las tropas propias y ajenas, la población quedó reducida a menos de la mitad (se calcula una caída del 60%, la gran mayoría compuesta por hombres en edades activas), las fronteras se vieron contraídas y el estado fue desmantelado.

La guerra ha sido contada desde diferentes perspectivas, que dieron lugar a un corpus documental muy heterogéneo, con visiones también muy diversas de la contienda. Por su parte, la historiografía más reciente utiliza esa producción y analiza sus interpretaciones de acuerdo al contexto en que fueron surgiendo, a la vez que despliega todas las herramientas del oficio para profundizar la investigación y ofrecer visiones de la guerra menos sesgadas ideológicamente, aunque no por ello carentes de juicios críticos. Sobre la base de esta historiografía, en las páginas que siguen realizaremos una síntesis de los orígenes del conflicto y sus principales etapas, para luego poner el foco en la participación de los argentinos y en las repercusiones y consecuencias que tuvo el conflicto en la conformación del estado y la nacionalidad argentina.

Historiografía sobre la guerra

En su excelente libro *Una guerra total: Paraguay, 1864-1870. Ensayo de historia del tiempo presente*, Luc Capdevila ofrece una síntesis de la historiografía sobre las causas de la guerra:

“La historiografía de las causas de la guerra de la Triple Alianza es por sí misma inmensa. Sin entrar en el detalle de las historias nacionales y locales y de las cronologías desfasadas, tres modelos explicativos se sucedieron. El primero, hijo salido de la escuela liberal se remonta al siglo XIX. Se trata de la versión de la historia escrita por los vencedores de la guerra. El acontecimiento es percibido como el enfrentamiento entre la civiliza-

ción y la barbarie, según un prisma de representaciones anteriormente organizado por Domingo Faustino Sarmiento para el caso de las guerras civiles argentinas. Sarmiento oponía la sociedad brutal de las campañas americanas gauchas llevadas a cabo por caudillos despóticos, al mundo cautivado y refinado de las élites urbanas inspiradas por la Europa de las Luces. Desde esta perspectiva, todas las responsabilidades se concentraron sobre lo locura mortal del tirano Francisco Solano López, verdugo sanguinario de su pueblo y feroz agresor amenazante de sus vecinos. A fines del siglo XIX el autócrata de Asunción fue calificado como 'Nerón sudamericano', y podría haber sido igualmente estigmatizado como el 'Rosas del Paraguay'. En el transcurso del siglo XX otra corriente historiográfica pujaba por la revisión de la historia a escala regional. Este movimiento era, al inicio del siglo XX, nacionalista y autoritario. Representado sobretudo en los ambientes católicos conservadores, luego populistas, el mismo propugnaba la rehabilitación de los caudillos del siglo pasado por razones ideológicas e identitarias, que se corresponden igualmente con las corrientes de memoria. Desde una cierta perspectiva se trataba de la visión de los vencidos en la historia —emanación de la esfera de influencia federalista y del eje conservador— partidarios de un republicanism rural donde el poder estaba concentrado en las manos de los caudillos. Otra generación revisionista, de sensibilidad marxista, apareció en los años comprendidos entre 1960 y 1970. Esta corriente desarrolló la tesis de los orígenes imperialistas del conflicto. Denunciaba la mano del capitalismo británico metida en la economía regional a través de la guerra de la Triple Alianza. Con el accionar de las élites liberales en el Río de la Plata, la City de Londres habría logrado abrir por la fuerza el mercado paraguayo, quebrando en la república de Francia y los López un modelo original de resistencia al subdesarrollo. Todos estos sistemas de representación de la guerra de la Triple Alianza continuaban activos al iniciarse el siglo XXI en los imaginarios sociales del Cono Sur. El tercer modelo explicativo, es el que es más utilizado hoy por los investigadores: la guerra es comprendida como el final del sistema geopolítico regional impulsado por el movimiento de las independencias, tomando por ciertas las formas de una regionalización de las guerras civiles del Plata. La guerra de la Triple Alianza es por lo tanto parte constitutiva de la construcción de los estados-nación emergentes."

Luc Capdevila, *Una guerra total: Paraguay, 1864-1870. Ensayo de historia del tiempo presente*, Asunción y Buenos Aires, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica y Sb, 2010, pp. 33-34. ■

La dinámica regional

Los estudios más recientes sobre la guerra, como hemos visto, han analizado y descartado las hipótesis que adjudicaban a Inglaterra un papel central en su gestación y desarrollo, y que entendían el conflicto en clave imperialista. Sin ignorar el contexto internacional, han puesto el foco, en cambio, en la dinámica regional, tanto en lo referente a la cuestión de la soberanía, los límites y la competencia por la supremacía entre los estados involucrados, como a las redes y alianzas políticas que atravesaban las fronteras e influían sobre la construcción de poder en el interior de cada uno de ellos. Se la considera un momento fundamental del proceso de consolidación de los estados-nación.

Desde la ruptura del vínculo colonial con la metrópoli, los territorios americanos que antes formaban parte del imperio español entraron en un largo y sinuoso proceso de formación de nuevas comunidades políticas. Desarmada la estructura administrativa imperial, el resultado inmediato fue la desarticulación de los espacios y el intento por reorganizarlos en nuevos estados, de muy diferentes geografías.

En el sur, el Virreinato del Río de la Plata había dado lugar a variadas experiencias de constitución estatal, con éxito dispar, pero hacia la segunda mitad del siglo XIX se habían constituido cuatro repúblicas independientes —Bolivia, el Paraguay, el Uruguay y la Argentina— y quedaban amplias zonas bajo el dominio de las sociedades indígenas, no subordinadas al poderío de los nuevos estados. Los límites entre estos eran aún algo imprecisos, y largas porciones de las fronteras eran motivo de disputa. Al mismo tiempo, ya desde el período colonial, existía una rivalidad territorial con la porción sudamericana en manos de Portugal, que luego se independizó como Imperio del Brasil. Había, además, un motivo adicional de desavenencia relacionado con el sistema fluvial que conectaba y a la vez dividía a cuatro de esos estados. Así, la cuestión de la libre navegación de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, principales vías de acceso y salida al mar para amplias regiones de esa vasta región, constituyó un tema recurrente de conflicto y negociación.

La inestabilidad de las fronteras no afectaba exclusivamente a la región del Plata, sino también al resto de Hispanoamérica, donde, durante el siglo XIX, las nuevas unidades estatales se vieron involucradas en repetidos conflictos entre sí y con rivales externos por cuestiones territoriales y de límites, que desencadenaron más de una guerra. En la década de 1860, a esos problemas se sumaron otras amenazas bélicas que mantuvieron en vilo a toda la región. A la invasión francesa a México, entre 1863 y 1867, se agregó la ocupación por parte de una escuadra

española de las islas Chinchas, en el Pacífico, episodio que desató un enfrentamiento armado entre España y el Perú, al que se sumó Chile, y que terminó con la derrota europea luego de varios combates navales.

Alarmados por estos episodios, varios países de la región buscaron el apoyo de sus vecinos, en propuestas de solidaridad hispanoamericana que desembocaron en la convocatoria a un congreso continental en Lima, en 1864. En la Argentina hubo movilizaciones públicas de apoyo al Perú y a la causa republicana frente a la agresión de la metrópoli, pero la política del gobierno nacional fue más bien reticente y evitó una condena abierta a los españoles. El presidente desautorizó a Sarmiento, quien, como enviado oficial a Chile y Perú, había dado públicas y entusiastas muestras de solidaridad continental y de adhesión al congreso. En materia de política exterior, Mitre se mostró reacio a los intentos de organización hispanoamericana, sostuvo repetidas veces su preferencia por mantener relaciones bilaterales con sus vecinos de América y privilegió, de hecho, el fortalecimiento de los lazos con algunos países de la vieja Europa.

En esa misma época, la situación en el escenario rioplatense se complicaba. Hacía apenas unas décadas que los respectivos estados habían afirmado su organización interna y su autonomía en relación con los demás, pero ningún gobierno abandonaba la costumbre de recurrir a los otros países en busca de aliados para perseguir enemigos, debilitar posibles rivales y modificar ecuaciones políticas internas poco confiables para sus propios fines. Así, el gobierno imperial siempre había intervenido en la política uruguaya para favorecer sus intereses, a la vez que había participado en la campaña contra Rosas para luego oscilar alternativamente entre la Confederación Argentina y el estado de Buenos Aires, en una política marcada sobre todo por la desconfianza hacia su vecino del sur.

El gobierno de Urquiza y los porteños, por su parte, también tenían sus respectivos amigos y aliados en el Uruguay, y cada uno buscó afirmar sus relaciones con el Brasil, en tanto que el primero se acercó al gobierno paraguayo para que mediara en el conflicto con los porteños. Aun el Paraguay, que había hecho del aislamiento una férrea política de estado durante el gobierno de José Rodríguez de Francia (1814-1840), con la llegada de su sucesor, Carlos Antonio López (1840-1862), había comenzado a abrir sus fronteras —le preocupaban los vínculos con el exterior— y las comunicaciones, y dedicaba mayor atención a las relaciones con sus vecinos.

En 1856, López firmó un tratado con el Brasil y la Confederación para asegurar la libre navegación de los ríos, y comenzó un acercamiento

to al Uruguay, que le podía ofrecer un camino alternativo de salida al mar. En ese marco, fue su hijo y sucesor en la presidencia, Francisco Solano López, quien se dispuso a intervenir más activamente en las relaciones regionales, entre otras cosas, para ampliar las posibilidades de expansión económica de su país y la defensa de las fronteras, que aspiraba consolidar.

Esta compleja trama de relaciones era muy sensible a los cambios políticos en cada uno de los países involucrados. En 1862, se produjeron varias novedades: en el Brasil, los liberales desplazaron a los conservadores en el gabinete del emperador Pedro II; en la Argentina, se produjo la unión definitiva entre Buenos Aires y la Confederación, bajo la hegemonía de la primera y la presidencia de Mitre; y en el Paraguay, fue designado presidente Francisco Solano López. Esta modificación de la ecuación política regional repercutió en el Uruguay, donde pronto se reactivó la larga disputa entre los dos partidos rivales: los blancos —en el poder— y los colorados.



Mariscal Francisco Solano López, *carte de visite*, fotografía francesa e inglesa, ca. 1864, Museo Julio Marc, Rosario.

Hacia la guerra

Los conflictos entre blancos y colorados se remontaban a las primeras décadas del siglo XIX, en una confrontación que involucraba, además, tramas de vinculación y alianzas de alcance regional. En el terreno de la política, las fronteras con la Argentina eran extremadamente porosas. Los blancos se asociaban con los federales, mientras que los unitarios, primero, y más tarde los liberales fueron socios de los colorados. Esta vinculación estrecha implicaba el apoyo mutuo en todos los niveles de la vida política, incluido el de la guerra.

El liberalismo porteño había contado entre sus filas a cuadros importantes del partido colorado, y varios de los jefes del ejército formado después de Pavón eran orientales y colorados. El ascenso de Mitre a la presidencia alarmó a los blancos, entonces en el poder, y aunque aquel le había asegurado al presidente Pedro Berro que no autorizaría una invasión desde la Argentina, las deudas que tenía con sus socios políticos y, en especial, con el general y caudillo colorado Venancio Flores, por sus servicios a la causa de Buenos Aires, lo llevarían finalmente a apoyarlo en la campaña militar que iniciaría contra el gobierno vecino en 1863.

Los brasileños, por su parte, nunca dejaron de ejercer presión sobre el Uruguay, y aunque sus fidelidades políticas variaron con el tiempo, en esta ocasión las relaciones con el gobierno de Berro fueron tensas desde el principio de su presidencia, cuando este decidió no renovar el tratado de comercio y navegación que daba privilegios comerciales al Brasil. La presencia de un número creciente de hacendados riograndenses que ocupaban tierras del lado uruguayo de la frontera para expandir sus empresas ganaderas se convirtió en una fuente de conflicto. Mientras el gobierno oriental intentaba asegurar su jurisdicción y control sobre esa región ante el temor de que se convirtiera en una zona dominada por los brasileños y, eventualmente, fuera absorbida por el imperio, la corona brasileña protestaba por lo que consideraba un atropello a los intereses y supuestos derechos de sus súbditos.

El Paraguay, en cambio, se había mantenido alejado de los conflictos políticos uruguayos. Las relaciones entre los gobiernos de Berro y Carlos Antonio López fueron cordiales y sólo se estrecharon más tarde, cuando su sucesor Francisco Solano López decidió intervenir activamente para apoyar al gobierno blanco después de la invasión de Venancio Flores en abril de 1863.

Esa invasión desencadenó una serie de acontecimientos que desembocarían en la guerra entre las cuatro naciones. El camino que llevó a

ese desenlace no es sencillo de seguir, y todavía existen puntos oscuros y controvertidos. Pero lo cierto es que el desembarco del caudillo colorado en la Banda Oriental para luchar contra el gobierno puso en movimiento a todos los actores de la región. Los porteños apoyaron a Flores, aunque públicamente el gobierno de Mitre —preocupado por el frente interno y desconfiado de los brasileños— proclamó su neutralidad y entró en tratativas diplomáticas para hallar una salida consensuada al conflicto. El imperio, por su parte, en nombre de la protección de sus súbditos amenazados, presionó al gobierno de Berro para negociar un acuerdo de paz con todas las partes involucradas. El fracaso de esos intentos derivó en la invasión de fuerzas brasileñas en territorio oriental, que luego se plegaron a las de Flores, en lucha abierta contra los blancos. El gobierno argentino, si bien no se sumó a la ofensiva, nada hizo para impedirla.

Entretanto, Solano López había decidido intervenir para frenar el avance brasileño y advertir al gobierno imperial que no toleraría una invasión militar al Uruguay. Ocurrida esta en octubre de 1864, el Paraguay rompió relaciones con el Brasil e invadió y ocupó militarmente el Mato Grosso. Pocos meses más tarde, las fuerzas imperiales derrotaron a los blancos y ocuparon Montevideo, e impusieron al jefe colorado en la presidencia. Así, el conflicto cambiaba de escala.

Esta brevísima referencia al preludio de la gran guerra refiere sólo a las principales actitudes de las partes involucradas, en los veintidós meses transcurridos entre el desembarco de Flores y la invasión del Mato Grosso, pero no da cuenta de las razones de cada una de ellas ni de la dinámica de las acciones y reacciones de los actores. Si bien la rivalidad interestatal y la pretensión de cada gobierno de afirmar su soberanía e influencia regional y asegurar sus fronteras pueden considerarse motivo suficiente de las fricciones entre ellos, no alcanzan sin embargo para explicar por qué condujeron a una guerra que la mayor parte de los involucrados no parecía haber previsto ni buscado.

Ello requeriría explorar en profundidad cómo se articularon problemas estructurales compartidos con cuestiones específicas a cada país, a su historia y a la vida política y social en esa coyuntura, así como con factores contingentes relativos a los hechos mismos y a las formas de comportamiento y reacción de los principales actores en juego. Un análisis de esas dimensiones está fuera del alcance de estas páginas, por lo que sólo se hará una referencia parcial a ellas, en la consideración de la intervención argentina en el conflicto.

La Triple Alianza

Decretada la guerra entre el Paraguay y el Brasil, el gobierno de Mitre rechazó una propuesta de alianza contra López presentada por la diplomacia imperial y, si bien formuló votos por el triunfo brasileño, reiteró que la Argentina seguiría siendo neutral. No obstante la desconfianza mutua entre los dos países más poderosos de la región, el ascenso de los liberales en la corte de Río había generado una corriente de simpatía ideológica con sus pares porteños, que la común empresa política en el Uruguay había afirmado. En Buenos Aires, una amplia opinión pública porteña, que incluía a oficialistas y opositores autonomistas, seguía con entusiasmo la causa colorada y comenzaba a henchirse de espíritu bélico.

Ese no era el ánimo, sin embargo, de las dirigencias federales con amplia representación en el resto del país, que no sólo se habían inclinado por los blancos, sino que veían en el Paraguay un posible aliado en su confrontación con los liberales. Ante la difícil situación, tanto el presidente Mitre como el jefe del federalismo, el general Urquiza, se movieron con extrema prudencia y, aunque no dejaron de actuar en función de sus intereses partidarios, rechazaron una alianza formal con sus respectivos amigos en la contienda bélica recién desatada.

Ese frágil equilibrio se rompió cuando el presidente paraguayo solicitó autorización al gobierno de la Argentina para pasar con sus tropas por el territorio de ese país, con el propósito de invadir Rio Grande do Sul. Con el argumento de sostener la neutralidad, y convencido de la debilidad paraguaya, Mitre denegó ese permiso y desató la reacción del Congreso paraguayo, que el 19 de marzo de 1865 declaró la guerra a la Argentina. Unos días después, vapores del Paraguay atacaron a navíos estacionados en el puerto de Corrientes y un ejército de 3000 soldados ocupó la ciudad.

Ante la llegada de los invasores, las autoridades provinciales abandonaron la ciudad, pero la mayor parte de los correntinos no intentó resistirse, en buena medida porque existían vínculos de larga data entre ambos pueblos, mientras que el Brasil era considerado con recelo por su carácter expansionista y su organización monárquica. En Buenos Aires, en cambio, la invasión exacerbó los ánimos guerreros y tanto nacionalistas como autonomistas, a través de los diarios y otras expresiones públicas, clamaron por una alianza con el Brasil contra el "tirano López". El gobierno movilizó al ejército y la Guardia Nacional, y ordenó la marcha del general Paunero y su regimiento hacia el nordeste. En este escenario, Urquiza —con cuya adhesión contaban los paraguayos— optó por enviar señales inequívocas de lealtad y apoyo a Mitre.

El 1° de mayo de 1865, la Argentina firmó el Tratado de la Triple Alianza con el Brasil y el Uruguay, por el cual los signatarios contrajeron una alianza ofensiva y defensiva "en la guerra provocada por el gobierno del Paraguay", con el objetivo explícito de derrocar ese gobierno, y fijaron las condiciones para la paz y la posguerra. En sus artículos principales, acordaba la composición del mando de los ejércitos; estipulaba que ninguna de las partes podría firmar la paz o la suspensión de las hostilidades en forma unilateral, ni depondría las armas sino de común acuerdo y una vez logrado el objetivo central; garantizaba el respeto a "la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay"; convenía que, una vez derrocado el gobierno y elegidas las nuevas autoridades por su pueblo, se harían "los arreglos necesarios [...] para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay"; se refería a las deudas e indemnizaciones de guerra y fijaba las condiciones sobre las cuales se exigiría al gobierno paraguayo la celebración de tratados definitivos de límites con los demás países. Además, en cláusulas que más tarde despertarían numerosas controversias, afirmaba que la guerra no se hacía contra "el pueblo paraguayo sino contra su gobierno" y establecía que el tratado debía mantenerse "secreto", hasta lograr su objetivo.

Los términos elegidos para referirse al "pueblo paraguayo" y el futuro del país en la posguerra abrevaban en la tradición liberal y buscaban dar al conflicto el carácter de una lucha contra el despotismo representado por Solano López. Esa misma línea de argumentación siguió el gobierno de Mitre —y también la adoptaron los principales diarios argentinos— para justificar la decisión de unirse al imperio, una nación monárquica y esclavista, además de adversaria histórica de la Argentina. A la supuesta justicia de la causa se agregaba la convicción de que la guerra sería corta, una idea compartida por el gobierno paraguayo. Sin embargo, se equivocaban, como se habían equivocado en la escalada de provocaciones que desataron la confrontación bélica.

Los brasileños estaban convencidos de que los paraguayos no se animarían a enfrentarlos; los argentinos estaban seguros de que los paraguayos amagarían con atacar pero no irían más lejos; y estos, por su parte, confiaban en que los federales, con Urquiza a la cabeza, se les unirían en la lucha contra Buenos Aires y el imperio o, en última instancia, que la amenaza de esa rebelión frenaría la alianza con los brasileños. Así sobrevino la guerra que ninguno había buscado, pero que todos habían contribuido a provocar.